



NUE 135-A-2019 (SP)

[REDACTED] contra Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS)
Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las catorce horas con diez minutos del día trece de enero de dos mil veinte.

Descripción del caso

El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por [REDACTED] en adelante el apelante, por medio de su apoderado general judicial [REDACTED] en contra de la resolución emitida por la oficial de información del **Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS)**, que denegó la información consistente en: *a) "Certificación de la nómina de todos los afiliados al Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Eléctrica de El Salvador, Actividades y Conexos, por sus siglas (STESEC), debidamente actualizada; y b) Copia certificada del legajo de documentos completos, presentados por la Junta Directiva General, electa en Asamblea General ordinaria, llevada a cabo el día veintisiete de abril de este año, en segunda convocatoria, llevada a cabo a las diez de la mañana", por ser clasificada como confidencial.*

O-C

fz

pe

El Instituto admitió la apelación y designó al Comisionado René Eduardo Cárcamo, sin embargo tras su renuncia al cargo, es oportuno asignar la conducción del presente procedimiento a la Comisionada suplente en funciones **Silvia Cristina Pérez Sánchez**, para instruir el procedimiento y elaborar el proyecto de resolución.

El 27 de junio del 2019, el **Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS)**, rindió el informe justificativo de ley suscrito por su apoderada [REDACTED] donde se ratificó en lo medular lo resuelto por la oficial de información.

Durante la instrucción de este procedimiento, el comisionado instructor en su momento presentó un informe en el que expresó, que luego de analizar el objeto y la causa del mismo, se determinó que el caso se reduce a una cuestión de Derecho, referente a la



aplicación de los principios de economía procesal, disponibilidad, prontitud, sencillez y rendición de cuentas reconocidos en el Art. 4 letras “b”, “c”, “f” y “h”; además de los arts. 6 letras “d”, “h”, 10, 17 y 102 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y en atención a líneas resolutivas emitidas por este Instituto.¹

Previo a la emisión de esta resolución, el 25 de julio de 2019, se realizó un segundo requerimiento a las partes de este caso, si ofrecerían medios probatorios que no consten en el expediente administrativo del trámite de la solicitud de información, o que resultara imprescindible la aportación de prueba diferente a la documental, para valorar realizar el señalamiento de audiencia oral respectivo o realizar un proceso de mero derecho, el cual fue notificado el día 29 del mismo mes.

Así pues, el 8 de agosto del 2019 la apoderada del **MTPS**, remitió a este Instituto un escrito donde anexó versión pública de la información consistente en: *Copia certificada del legajo de documentos completos, presentados por la Junta Directiva General, electa en Asamblea General ordinaria, llevada a cabo el día veintisiete de abril de este año, en segunda convocatoria, llevada a cabo a las diez de la mañana*, con la finalidad de ser entregados al apelante,

Por lo anterior, el 23 de octubre de 2019 se requirió a Luis Felipe Sánchez López, en calidad de apoderado general de [REDACTED] que se apersonara a las instalaciones de este Instituto a retirar la información remitida por el **MTPS**, para pronunciarse sobre lo recibido en un término de diez hábiles, siendo efectiva la notificación el 1 de noviembre de 2019; sin embargo, a la fecha el apoderado del apelante, no ha retirado la información que fue puesta a su disposición.

Análisis del caso

El análisis jurídico del presente caso seguirá el orden lógico siguiente: I) breves consideraciones sobre los límites al Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP); II)

¹ Instituto de Acceso a la Información Pública, Resolución Definitiva, Referencia NUE 274-A-2015, (El Salvador, 2016).

análisis de la naturaleza de la información solicitada; **III)** análisis de los argumentos planteados para considerar que la información debe divulgarse.

I. La LAIP establece los límites a la entrega de información en poder de los entes obligados, los cuales incluyen la información reservada y confidencial. Por esta última se entiende aquella que consiste en “información privada en poder del Estado, cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal en razón de un interés personal jurídicamente protegido”, como bien podrían ser el derecho a la intimidad personal, al honor o a la autodeterminación informativa (Art. 6 letras a, b y f de la LAIP).

El derecho a la autodeterminación informativa tiene por objeto preservar la información de las personas tanto físicas como jurídicas que se encuentra contenida en registros públicos o privados frente a su utilización arbitraria, sin que necesariamente se deba tratar de datos íntimos. Desde esa perspectiva, el ámbito de protección del aludido derecho no puede entenderse limitado exclusivamente a determinado tipo de datos —es decir, los sensibles o íntimos— pues, lo decisivo para fijar el objeto que con este se busca conservar es la utilidad y el tipo de procesamiento que de la información personal se haga.

De acuerdo con el Art. 58 letra “b” de la LAIP, este Instituto tiene el mandato de garantizar tanto el debido ejercicio del DAIP como la protección de la información personal, por lo que cada caso concreto debe analizarse prolijamente a efecto de establecer las medidas que concilien y ponderen ambos derechos.

Dado que la controversia se centra en determinar si la información solicitada es confidencial o no, este Instituto deberá pronunciarse previamente si el caso en análisis se ubica en el supuesto regulado en el Art. 24 letra “c” de la LAIP y luego, si procede la elaboración de una versión pública de la información, de conformidad al Art. 30 de la LAIP.

II. En ese sentido, la afiliación sindical, como manifestación de la libertad sindical, indica que una persona trabajadora —del sector público o privado— o empleadora, es o fue miembro de un sindicato, federación, confederación o de una organización internacional de trabajadores o empleadores. Esta información, de acuerdo al Art. 6 letra “b” de la LAIP, es un dato personal sensible, de manera que solo corresponde a sus titulares conocer sobre



dichos datos; y, solo ellos, sus representantes legales y apoderados pueden acceder a los mismos.

El **MTPS** posee ese tipo de información en el ejercicio de sus facultades legales, por lo que debe utilizarla exclusivamente para el cumplimiento de sus fines institucionales y adoptar medidas que protejan la seguridad de esos datos; así como respetar la prohibición de difundirlos, distribuirlos o comercializarlos, salvo que haya mediado el consentimiento expreso y libre de los titulares o que se trate de aquellos casos en que no se requiera tal consentimiento, de conformidad con los Arts. 32, 33 y 34 de la LAIP.

A juicio de este Instituto con la entrega íntegra de *Certificación de la nómina de todos los afiliados al Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Eléctrica de El Salvador, Actividades y Conexos, por sus siglas (STESEC), debidamente actualizada*, se estaría divulgando información personal sensible, que vulneraría la finalidad del uso de esos datos por el **MTPS**, poniendo en peligro otros derechos de índole laboral.

En otras palabras, los argumentos del apoderado del apelante para fundamentar su pretensión de acceder a la nómina de afiliados al Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Eléctrica de El Salvador, Actividades y Conexos, por sus siglas (STESEC), debidamente actualizada, debido a que su poderdante es afiliado de esa organización sindical, no es una explicación contundente para tener acceso a la información, que es claramente información confidencial, inherente de cada persona y se estaría divulgando información personal sensible, que vulneraría la finalidad del uso de esos datos por el **MTPS**, poniendo en peligro otros derechos de índole laboral.

III. Sin embargo, tal como se dijo anteriormente, los titulares de la información son las personas cuya afiliación sindical se pretende conocer, por lo que corresponde a ellos o a sus representantes legales otorgar el consentimiento para proporcionarlos.

A pesar de ello, la decisión de la oficial de información del **MTPS** de denegar la información solicitada es justificada, por ser confidencial, ya que se trata de datos personales sensibles. En ese sentido, procede que este Instituto modifique la resolución impugnada y ordene al **MTPS** que solicite, a través del Secretario General del STESEC, **el consentimiento de cada uno de los afiliados** a dicho sindicato, incluyendo a su Secretario, o de las personas

cuyos datos consten en las listas de afiliados y miembros de la Junta Directiva, conforme a la última nómina actualizada enviada a ese ente obligado (Art. 225 numeral 3 del Código de Trabajo) para entregar la información solicitada.² En caso de no obtener el consentimiento de alguna de las personas mencionadas en dichos documentos deberán omitirse sus datos.

Decisión del caso

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y los Arts. 2, 6, 85 y 86 de la Cn; 52 Inc. 3°, 58 letra “d”, 90, 94, 96 letra “d” y 102 LAIP; 79 y 135 de la LPA, este Instituto **RESUELVE**:

a) Modificar la resolución de la oficial de información del **Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS)** emitida el 21 de mayo de 2019.

b) Ordenar al **MTPS**, a través de su oficial de Información, que en el **plazo de quince días hábiles** contados a partir de la notificación de la presente resolución, comunique por medio de su apoderado a [REDACTED] las diligencias efectuadas para obtener el consentimiento para la entrega de los datos personales requeridos consistentes en: *Certificación de la nómina de todos los afiliados al Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Eléctrica de El Salvador, Actividades y Conexos, por sus siglas (STESEC), debidamente actualizada*; en el caso de existir consentimiento total o parcial **deberá entregar, en el mismo plazo antes señalado**, la información en controversia en la forma consentida por sus titulares.

c) Ordenar al **MTPS** que, dentro de las **veinticuatro horas** posteriores al vencimiento del plazo anterior, remita a este Instituto un informe de cumplimiento de la obligación contenida en la letra “b)” de esta parte resolutive, el cual incluya un acta en la que conste la entrega de la documentación al apelante, así como su recepción; bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe puede ser remitido vía electrónica a la dirección: **oficialreceptor@iaip.gob.sv**.

² Instituto de Acceso a la Información Pública, Resolución Definitiva, Referencia NUE 81-A-2015, (El Salvador, 2015).

d) **Hace saber a las partes** que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, dejando expedito el derecho de acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativo de conformidad con el Art. 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos, si así se considerase necesario.

e) **Remitir** el presente expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto para verificar la eficacia de esta resolución.

f) **Publíquese** esta resolución, oportunamente.

Notifíquese.-



PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN

JV/C

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los veintiocho días del mes de enero de dos mil veinte.



NOTIFICADOR
IAIP

